



U.S. DEPARTMENT *of* STATE

## **INFORME ANUAL SOBRE PRÁCTICAS DE DERECHOS HUMANOS**

Publicado por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo  
8 de marzo de 2006

### **ARGENTINA**

La Argentina es una república constitucional y federal, con una población de aproximadamente 39,5 millones. En 2003, los ciudadanos eligieron presidente a Néstor Kirchner en una elección libre e imparcial, en la cual participaron varios partidos. El 23 de octubre de 2005 se realizaron elecciones legislativas nacionales. Las autoridades civiles generalmente mantuvieron un efectivo control sobre las fuerzas de seguridad.

El gobierno generalmente respetó los derechos humanos de sus ciudadanos. Los siguientes problemas de derechos humanos fueron informados:

- \* Casos de muertes y brutalidad por parte de la policía y agentes penitenciarios.
- \* Superpoblación, defectuosas condiciones y amenazas a la vida en las prisiones.
- \* Arrestos y detenciones arbitrarias.
- \* Prolongadas detenciones previas al inicio de los juicios.
- \* Violencia doméstica y acoso sexual contra las mujeres.
- \* Trata de personas para explotación sexual y laboral
- \* Trabajo infantil

En junio, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de las leyes del perdón aprobadas en 1986 y 1987, abriendo el camino para la reanudación de juicios contra centenares de ex militares y ex integrantes de las fuerzas de seguridad, cuyos procesos habían sido paralizados cuando se aprobaron tales leyes. Aunque subsistieron numerosos problemas, el gobierno avanzó en lo referido a la reforma judicial; en agosto tuvo lugar el primer juicio por jurados.

\* Respeto por los derechos humanos

Sección 1. Respeto por la integridad de la persona, incluyendo la libertad, de:

a. Privación arbitraria o ilegítima de la vida

Mientras el gobierno o sus agentes no cometieron ningún asesinato motivado por razones políticas, funcionarios policiales y guardiacárceles perpetraron homicidios mediante el uso excesivo o injustificado de la fuerza. Las autoridades investigaron y, en algunos casos, detuvieron, enjuiciaron y lograron la condena de los funcionarios involucrados.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) informó que las fuerzas de seguridad fueron responsables de 53 muertes en el área del Gran Buenos Aires en el primer semestre del año. En esa cifra se incluyen personas que resultaron muertas en enfrentamientos con fuerzas de seguridad durante la presunta comisión de delitos.

En febrero, en Villa Lugano, la Policía Federal (PFA) arrestó a tres policías, los agentes Adrián Bustos y Miguel Ángel Cisneros y el cabo Mariano Almirón por la muerte de la adolescente Camila Arjona. Los tres policías continuaban con prisión preventiva a la espera del comienzo del juicio.

En mayo, un tribunal de San Isidro absolvió a un ex funcionario policial, que en 1999 había provocado la muerte de un sospechoso de 16 años, que se encontraba desarmado. Una corte superior denegó la apelación que había presentado el fiscal.

Continúa la investigación acerca de la muerte acontecida a raíz de un incendio, en octubre de 2004, de tres jóvenes detenidos en una comisaría de Buenos Aires. Nueve policías fueron suspendidos y permanecían bajo investigación al finalizar el año.

El 22 de septiembre, el tribunal superior de la Provincia de Santiago del Estero ordenó el comienzo del juicio de siete sospechosos de haber participado, en 2003, de las muertes de Patricia Villalba y Leyla Bashier Nazar. Entre los siete acusados figuran el ex jefe de informaciones de la provincia y tres oficiales de la policía provincial; el juicio continuaba su curso al finalizar el año. Sigue una investigación sobre la probable participación en estos hechos de otros funcionarios policiales y ex funcionarios provinciales.

El 9 de enero, una corte sentenció a prisión perpetua a los ex oficiales de la policía de Provincia de Buenos Aires Alfredo Franchiotti y Alejandro Acosta por la muerte, en 2002, de los manifestantes Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Tres de los otros cinco oficiales de policía sometidos a juicio fueron encontrados culpables de encubrimiento del crimen y recibieron condenas de cuatro años de prisión; los otros dos oficiales recibieron condenas de ejecución condicional por dos y tres años, respectivamente.

En septiembre los ex oficiales de policía Marcos Bressan y Martín Alejandro Ferreira fueron absueltos por las muertes de Gastón Galván y Miguel Burgos, respectivamente.

b. Desapariciones

No hubo informes sobre desapariciones por razones políticas.

Los procesos judiciales relacionados con muertes, desapariciones y tortura, cometidos por el régimen militar de 1976-83 continuaron (ver la sección 1.e.). En junio, la Corte Suprema estableció que las leyes del perdón, de “punto final” y de “obediencia debida” de 1986 y 1987, eran inconstitucionales, abriendo el camino para la reanudación de los procedimientos judiciales suspendidos contra centenares de ex militares y ex miembros de las fuerzas de seguridad, acusados de desapariciones forzadas.

La Subsecretaría de Derechos Humanos, que mantiene los archivos de la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas, recibió 9.005 pedidos de compensación financiera por parte de familiares de quienes fallecieron o desaparecieron durante la dictadura militar.

Las autoridades judiciales continuaron la investigación de casos de secuestros y adopción ilegal, por parte de miembros de la ex dictadura militar, de bebés hijos de disidentes detenidas. Se identificaron ochenta y un casos de hijos de disidentes detenidos y desaparecidos que fueron adoptados ilegalmente y a quienes se notificó sobre su verdadera identidad.

En abril tres oficiales de la policía bonaerense fueron sentenciados a prisión por secuestrar y extorsionar a un comerciante. Uno recibió una condena de 14 años de prisión, mientras que los otros dos fueron condenados a 13 años y medio.

c. Tortura y otras formas de tratamiento o castigo cruel, inhumano o degradante.

A pesar de que la ley prohíbe tales prácticas y establece penalidades para la tortura similares a aquellas por homicidio, algunos policías y agentes penitenciarios continuaron empleando tortura y brutalidad. Organizaciones defensoras de derechos humanos informaron sobre brutalidad policial y la ocasional tortura de sospechosos. Si bien el gobierno investigó denuncias sobre brutalidad policial en las cárceles, hubo pocas condenas en comparación con el número de casos reportados.

En otro caso documentado por la independiente Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, Cristian López Toledo y Claudio Márquez Laineker, prisioneros de la cárcel de La Plata, fueron torturados con descargas eléctricas después de haber solicitado poder entrevistar a los miembros de esa Comisión durante su visita a la prisión, en agosto. En un posterior juicio, los peritos dieron por acreditadas las denuncias de la Comisión.

\* Condiciones carcelarias y de los centros de detención

Las condiciones carcelarias fueron a menudo pobres y atentatorias contra la vida. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró que “la sobrepoblación, deficiente atención de la salud, la insuficiente y dilapidada infraestructura, la nutrición inadecuada y el vigente tratamiento inhumano de los detenidos...resultaron en violaciones a los derechos humanos” en los centros de detención. La Comisión agregó que la violencia en varias prisiones condujo a la muerte

y a 'serios daños físicos y psicológicos en los internos'. El CELS en su publicación de 2005 "El Colapso del Sistema Carcelario" citó un informe del Servicio Penitenciario Federal indicando que el 28,5 por ciento de las cárceles federales estaban sobrepobladas y que entre el 40 y el 45 por ciento se encontraban en su máxima capacidad. En la Provincia de Buenos Aires el 54 por ciento de las prisiones provinciales estaban sobrepobladas y el 28 por ciento se encontraban al límite de su capacidad.

En febrero, un motín en la cárcel San Martín, en Córdoba, culminó con las muertes de cinco reclusos, dos guardias y un oficial de policía. En abril, en la prisión de Coronda, provincia de Santa Fe, prisioneros asesinaron a otros 13 internos en lo que fue descrito como un "ajuste de cuentas" entre bandas rivales. El 16 de octubre, 33 presos murieron por inhalación de humo procedente de un incendio en una celda, originado durante un disturbio en la cárcel de Magdalena, en la provincia de Buenos Aires. Familiares de las víctimas dijeron que los incendios fueron una represalia debido a que algunos reclusos de ese pabellón habían elevado quejas. Un informe de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires señaló que, de acuerdo con sus investigaciones, hubo complicidad oficial en las muertes. El informe también dijo que las puertas de emergencia permanecieron cerradas durante el incendio y que la mitad de los matafuegos se encontraba con sus cargas vencidas. Añade que los guardias emplearon la fuerza, incluyendo disparos de balas de goma, para evitar que los presos de las celdas vecinas acudieran en ayuda de aquellos que se encontraban encerrados.

La sobrepoblación en los establecimientos juveniles determinó que los menores permanecieran detenidos en comisarías, aunque separados de los detenidos mayores. Informes confiables indicaron que los procesados a menudo fueron alojados en los mismos lugares que los condenados. En mayo, la Corte Suprema apoyó un pedido formulado por el CELS en beneficio de todos los alojados en cárceles de la Provincia de Buenos Aires y ordenó que finalice la detención de menores y personas enfermas en comisarías. Poco después tales detenidos fueron enviados a establecimientos juveniles, institutos psiquiátricos o centros especializados. La cantidad total de adultos detenidos en dependencias policiales de la provincia de Buenos Aires también descendió durante el año de 5.500 a 4.200.

El gobierno permitió visitas a las cárceles por parte de observadores internacionales de derechos humanos y tales visitas tuvieron lugar durante el año.

#### d. Arrestos o detenciones arbitrarias

La ley prohíbe los arrestos y detenciones arbitrarias y el gobierno generalmente respetó estas prohibiciones. Sin embargo, ocasionalmente la policía arrestó y detuvo a ciudadanos en forma arbitraria. En el pasado, grupos de derechos humanos informaron sobre dificultades para documentar tales incidentes debido a que las víctimas fueron renuentes a efectuar denuncias por temor a represalias policiales o por escepticismo acerca de si la policía podría actuar.

#### \* Papel de la policía y del aparato de seguridad

La Policía Federal Argentina (PFA), que se encuentra bajo la órbita del Ministerio del Interior, es competente para mantener la ley y el orden en la Capital Federal y por

los delitos federales en las provincias. Adicionalmente, cada provincia tiene su propia fuerza policial que responde a un ministerio o secretaría provincial de seguridad. Las fuerzas, individualmente, variaron considerablemente en su efectividad y respeto por los derechos humanos. La corrupción fue endémica en algunas fuerzas y la impunidad ante los abusos policiales fue común.

Los abusos más habituales incluyeron extorsión y protección a quienes están involucrados en el juego ilegal, la prostitución y el robo de vehículos, como así también la detención y extorsión de ciudadanos bajo la amenaza de “plantarles” evidencias para acusarlos de algunos delitos. Algunos policías también estuvieron involucrados con el tráfico de drogas. Los esfuerzos continuaron en la Provincia de Buenos Aires para remover e iniciar causas judiciales contra los policías por corrupción y otros ilícitos. En noviembre, el ministro de seguridad de la Provincia despidió a 46 oficiales de policía que se encontraban siendo investigados por presuntos abusos, corrupción, extorsión y homicidio injustificado, llevando a 935 el número de funcionarios destituidos, suspendidos o bajo investigación por malversación y actividades delictuales entre mayo de 2004 y noviembre de 2005. Otros juicios se encontraban pendientes.

#### Arresto y detención

La policía puede detener a sospechosos hasta por diez horas sin orden de arresto si las autoridades tienen sospechas fundadas de que los sospechosos han cometido, o están por cometer, un delito o si no están en condiciones de determinar la identidad del sospechoso. Grupos de derechos humanos argumentaron que esta disposición de la ley fue, a menudo, desconocida.

La ley otorga a una persona detenida el derecho a una rápida determinación sobre la legalidad de tal detención, que asegura su presentación ante un juez, que debe determinar si debe proceder a una investigación. Hubo frecuentes demoras en este proceso como así también en informar a los detenidos sobre los cargos que pesaron sobre ellos, parcialmente debido a que la mayoría de esas personas confían en el sobrecargado sistema del defensor público.

La ley prevé el derecho de salir en libertad bajo fianza. Aunque este sistema fue utilizado, grupos de derechos civiles han señalado que los jueces fueron más proclives a mantener a los acusados bajo prisión preventiva que a conceder la libertad hasta el comienzo de los juicios.

Los detenidos tuvieron rápido acceso a sus abogados, y los defensores públicos fueron puestos a disposición de los encausados que no tenían medios para acceder a abogados privados. Sin embargo, tal disposición muchas veces se vio demorada como consecuencia de las sobrecargas que padece el sistema. La falta de recursos que soporta la oficina de los defensores públicos determinó una gran acumulación de casos. A los detenidos también se les permitió acceso, aunque no siempre en forma rápida, a sus familiares.

No hubo informes sobre detenidos políticos.

La ley prevé detenciones de hasta dos años de las personas que están aguardando un juicio o que lo están sustanciando; este período puede extenderse a tres años en ciertas situaciones limitadas. El lento proceso del sistema judicial a menudo

derivó en prolongadas detenciones, más allá del período estipulado por la ley (ver la sección 1.e.) Habitualmente se computó el tiempo que un condenado pasó en prisión mientras se sustanciaba el juicio.. De acuerdo con un informe de la Oficina Federal de Política Criminal, aproximadamente el 65 por ciento de los internos en las prisiones federales habían sido procesados, pero se encontraban esperando el comienzo o la finalización de sus juicios. El CELS informó que en la Provincia de Buenos Aires la proporción llegaba al 84 por ciento en 2004. La comunidad indígena Nam Qom Toba, de la Provincia de Formosa, dijo que algunos de sus miembros fueron detenidos arbitrariamente (ver sección 5).

e. Negativa de un juicio justo.

Aunque la ley prevé un sistema judicial independiente, algunos jueces y empleados judiciales fueron ineficientes y, a veces, estuvieron sujetos a manipulación política. Hubo confiables informes de esfuerzos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad y otras para intimidar a miembros de la Justicia y a testigos. El sistema se vio obstaculizado por demoras injustificadas, trabas procesales, cambios de jueces, inapropiado apoyo administrativo e incompetencia. Los jueces tienen una amplia discreción acerca de qué y cómo investigar, contribuyendo a la percepción pública de que muchas decisiones fueron arbitrarias. Las denuncias de corrupción en tribunales provinciales fueron más frecuentes que a nivel federal, reflejando fuertes conexiones entre algunos gobernadores y los sistemas judiciales en sus provincias.

El sistema judicial se divide en tribunales federales y provinciales, ambos encabezados por una Corte Suprema, con cámaras de apelaciones y tribunales de primer instancia por debajo. Los tribunales federales se dividen en tribunales penales y económicos.

En los últimos dos años, las investigaciones acerca de miembros de la Corte Suprema por parte de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados concluyeron en septiembre último con el juicio político del juez Antonio Boggiano, el cual siguió a otro, en 2003, y a la renuncia de otros tres jueces en 2004.

Los juicios son públicos y los acusados tienen el derecho a la defensa legal y a convocar a testigos. Durante la etapa investigativa, los imputados pueden formular preguntas por escrito a los jueces a cargo de la investigación. Un grupo de jueces decide si es culpable o inocente. Los tribunales provinciales y federales continuaron la transición hacia juicios orales en casos penales, reemplazando el antiguo sistema basado en presentaciones escritas. Aunque la Constitución de 1994 prevé el juicio por jurados, todavía no se ha dictado la reglamentación. Las prolongadas demoras en los juicios constituyeron un problema. Hay una disposición que garantiza defensores públicos a los indigentes. Sin embargo, en la práctica este servicio no siempre es suministrado debido a la falta de recursos. Se presume que los acusados son inocentes y tienen el derecho de apelación, como así también lo tienen los fiscales. Los menores de 16 años son inimputables.

Existe un sistema de cortes militares, que tienen competencia sobre el personal militar.

\* Prisioneros políticos

No hubo informes sobre prisioneros políticos.

f. Interferencia arbitraria sobre la privacidad, la familia, el hogar o la correspondencia.

La ley prohíbe tales acciones y el gobierno generalmente respetó esas prohibiciones en la práctica.

Sección 2. Respeto por las libertades civiles, incluyendo:

a. Libertad de expresión y de prensa

La ley dispone la libertad de expresión y de prensa, y el gobierno generalmente respetó estos derechos en la práctica.

La prensa independiente fue activa y expresó una variedad de puntos de vista sin restricciones. Un número de periódicos y revistas independientes se publicaron libremente, y todos los medios gráficos pertenecieron a propietarios privados. Radios y estaciones de TV privadas transmitieron libremente. El gobierno federal es dueño de la agencia de noticias TELAM, de una radio y de un canal de TV. Unos pocos gobiernos provinciales asimismo son dueños de canales de TV.

Algunas organizaciones de derechos civiles y varios medios se quejaron de que agencias del gobierno nacional y provinciales sutilmente interfirieron con la libertad de prensa y la independencia editorial, por ejemplo, derivando/asignando publicidad oficial de acuerdo a motivos políticos o personales. Según un informe de la ONG Poder Ciudadano, la versión local de "Transparency International", hubo asignación de publicidad discriminatoria en los diarios nacionales, notando, por ejemplo, que a pesar de que el diario La Nación tuvo la segunda circulación más alta del país, recibió menos publicidad oficial que el diario Página 12, que tuvo una circulación mucho menor pero fue ampliamente percibido como quien brinda apoyo a las políticas gubernamentales.

No hubo restricciones por parte del gobierno sobre Internet o la libertad académica.

b. Libertad de asociación pacífica o asamblea

La ley dispone la libertad de asamblea y asociación, y el gobierno generalmente respeta estos derechos en la práctica. Aunque la mayoría de las protestas y demostraciones fue pacífica, hubo demostraciones violentas y enfrentamientos con fuerzas de seguridad, que resultaron en heridos y arrestos. Ocasionalmente, las fuerzas de seguridad utilizaron balas de goma pero más a menudo usaron gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersar a los revoltosos.

Los manifestantes fueron detenidos en varios casos, lo que derivó en acusaciones de que el gobierno estaba criminalizando las protestas. Según se ha informado, a menudo se mezclan agitadores en demostraciones pacíficas para provocar la confrontación con la policía.

c. Libertad de culto

La ley dispone la libertad de culto, y el gobierno generalmente respeta este derecho en la práctica. La ley estipula que el gobierno federal 'sostiene el culto Católico Apostólico y Romano' y el gobierno proporciona a la Iglesia Católica una variedad de subsidios. Otros cultos religiosos fueron practicados libremente.

A fin de poder oficiar servicios religiosos y obtener la eximición de impuestos, las organizaciones religiosas deben registrarse en la Secretaría de Culto del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y reportarse periódicamente a fin de mantener su status. En septiembre, el secretario de culto emitió nuevas reglamentaciones, luego de consultar con todos los grupos religiosos, a fin de agilizar el proceso de registro para grupos religiosos.

Abuso social y discriminación

Los actos de discriminación y vandalismo contra minorías religiosas, particularmente la comunidad judía, continuaron. El gobierno continuó apoyando el diálogo público a fin de señalar discriminaciones pasadas y fomentar la tolerancia religiosa. En julio, el secretario de Culto, junto con la Universidad del Salvador y la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones, fue el anfitrión del Tercer Coloquio Latinoamericano sobre Religión y Sociedad; líderes de las comunidades Cristiana, Judía, Musulmana e indígena asistieron al coloquio.

La comunidad judía comprende, de acuerdo a algunas estimaciones, entre 280 mil y 300 mil personas. Hubo una serie de informes sobre actos antisemitas, incluyendo amenazas contra organizaciones e individuos judíos. El 29 de diciembre, en La Plata, un monumento en honor al ex Primer Ministro israelí Yitzhak Rabin fue atacado. En noviembre, los simpatizantes de un equipo de básquet que jugaba contra el Centro Juvenil Sionista de La Plata, cantó epítetos antisemitas. Los incidentes más frecuentes incluyeron pintadas antisemitas y pro-nazis y posters en ciudades de todo el país, y la proliferación de publicaciones antisemitas en las librerías. Las organizaciones judías señalaron su continua preocupación pero hicieron notar que no hubo un aumento en los incidentes en comparación con el año anterior.

Para un debate más detallado, ver el Informe Internacional sobre Libertad de Culto del 2005.

d. Libertad de tránsito dentro del país, viajes al exterior, emigración y repatriación.

La ley prevé estos derechos, y el gobierno generalmente los respetó en la práctica.

La ley prohíbe el exilio forzado, y el gobierno no mandó a nadie al exilio.

Protección de refugiados

La ley prevé la concesión de la condición de asilado o refugiado de acuerdo con lo estipulado en la Convención de la ONU de 1951 relacionado con el Status de Refugiados y su protocolo de 1967, y el gobierno ha establecido un sistema a fin de proporcionar protección a los refugiados. El gobierno firmó un acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU (ACNUR) para un programa

destinado a reubicar familias colombianas en riesgo; asimismo, mantuvo un comité interministerial para evaluar los pedidos de refugio y asilo. El gobierno aceptó refugiados para su reasentamiento. En la práctica, el gobierno dispuso protección contra el ´refoulement´: la repatriación de personas a un país donde temen ser perseguidos. El gobierno otorgó el status de refugiado o asilado a unas 213 personas durante el año.

La ley, asimismo, permite al gobierno brindar protección temporaria por razones humanitarias, inclusive la reunificación familiar, a individuos que no reúnen las condiciones necesarias para ser considerados refugiados según la convención de 1951 y el protocolo de 1967.

El gobierno cooperó con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados y otras organizaciones humanitarias en la asistencia de refugiados y los que solicitaron asilo.

Sección 3. Respeto de derechos políticos: el derecho de los ciudadanos a cambiar su gobierno

La ley proporciona a los ciudadanos el derecho a cambiar su gobierno en forma pacífica, y los ciudadanos ejercieron este derecho en la práctica por medio de elecciones periódicas, libres y justas, basadas en el sufragio universal.

#### Elecciones y participación política.

En 2003, Néstor Kirchner obtuvo gran cantidad de votos en las elecciones presidenciales, generalmente consideradas libres y justas. El 23 de octubre, se llevaron a cabo elecciones legislativas nacionales y provinciales. Al nivel nacional, la mitad de las bancas en la Cámara de Diputados y un tercio de las del Senado debían renovarse. Los observadores consideraron que las elecciones fueron libres y justas, y no hubo denuncias de fraude por parte de ninguno de los partidos mayoritarios.

Las normas indican que un tercio de los miembros de ambas cámaras deben ser mujeres, objetivo que se alcanza a través de listas de candidatos equilibradas. Hubo 31 mujeres entre las 72 bancas del Senado y otras 86 entre los 257 escaños de la Cámara de Diputados. Hubo dos jueces mujeres en la Corte Suprema y una mujer integrante del gabinete de ministros.

No se supo de la presencia de minorías indígenas, étnicas o raciales en la legislatura nacional, ni en el gabinete o la Corte Suprema.

#### Corrupción en el gobierno y transparencia.

El Índice anual de Transparencia Internacional indicó que se percibió un ´severo problema de corrupción´ en el país. El gobierno continuó en su búsqueda de medidas anti-corrupción. En septiembre, el Senado le hizo juicio político al juez de la Corte Suprema Antonio Boggiano, luego de una investigación de la Cámara de Diputados por acusaciones de mal desempeño en el ejercicio de su cargo (ver sección 1. e.) Los juicios a una cantidad de ex funcionarios de gobierno acusados de corrupción continuaron. Instituciones históricamente débiles y un sistema judicial a menudo inefectivo y politizado hicieron que fuera difícil la erradicación de la corrupción de manera sistemática.

La ley dispone el acceso público a información del gobierno. A nivel nacional, un decreto del Poder Ejecutivo requiere que las oficinas dependientes del ejecutivo respondan a los pedidos de información pública dentro de los 10 días hábiles. Por lo general, las oficinas generalmente no cumplieron en forma cabal con este requisito, debido a que pocas de ellas habían desarrollado los mecanismos internos necesarios para responder eficientemente a estos pedidos.

#### Sección 4 Actitud del gobierno respecto de investigaciones Internacionales y no gubernamentales sobre supuestas violaciones a los derechos humanos

Una amplia gama de grupos de derechos humanos nacionales e internacionales operaron sin restricciones del gobierno, investigando y publicando sus hallazgos sobre casos de derechos humanos. Usualmente, el gobierno se mostró cooperativo y por lo general se interesó por sus puntos de vista.

#### Sección 5 Discriminación, abusos por parte de la sociedad, y trata de personas

La ley prohíbe la discriminación basada en raza, género, discapacidad, idioma, o status social, y el gobierno generalmente dispuso que se respetaran estas disposiciones en la práctica.

##### Mujeres

La ley prohíbe la violencia doméstica, incluso el abuso por parte del esposo, y dispone que se desaloje al esposo abusivo del hogar, pero no estipula penas a menos que la violencia conlleve delitos contra la 'integridad sexual'. En este caso, las penas pueden llegar hasta los 20 años de prisión. La violencia doméstica contra las mujeres fue un serio problema. En el 2004, el Banco Interamericano de Desarrollo calculó que un 25% de mujeres fueron víctimas de violencia doméstica.

Cualquier persona que sea víctima de violencia doméstica física o psicológica puede hacer una denuncia formal ante un juez o en una comisaría, y la ley le otorga a jueces de familia el derecho a evitar que el perpetrador de un acto violento entre a la casa o el lugar de trabajo de la víctima. Asimismo, se pueden presentar los cargos en una corte penal, la cual puede aplicar las correspondientes penas. Sin embargo, la falta de vigilancia por parte de la policía y del sistema judicial a menudo resultaron en una falta de protección de las víctimas.

Instituciones privadas y públicas ofrecieron programas de prevención y proporcionaron apoyo y tratamiento para las mujeres abusadas, pero hubo poco alojamiento transitorio. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires operó un pequeño albergue para mujeres golpeadas y una línea telefónica gratuita las 24 horas ofreciendo apoyo y guía a víctimas de la violencia; sin embargo, sólo hubo algunos otros pocos refugios.

Las ONG enfatizaron que las mujeres a menudo no tenían un conocimiento cabal de sus derechos o aquellas acciones que podrían ser consideradas delitos punibles. Además, hubo una gran disparidad entre centros urbanos y áreas rurales sobre la toma de conciencia de las mujeres y su acceso a la igualdad de derechos. Las mujeres indígenas fueron particularmente vulnerables debido a tasas más altas de analfabetismo y a insuficientes recursos educacionales bilingües.

La ley pena la violación, incluso la violación dentro del matrimonio, pero la necesidad de una prueba, ya sea en forma de claro daño físico o el testimonio de un testigo, a menudo presentó problemas. Las penas por violación llegaron hasta los 20 años de prisión. Aunque no hubo estadísticas confiables, los defensores creen que la violación no fue un hecho poco común. Los defensores de los derechos de la mujer denunciaron que las actitudes de la policía, los hospitales y los tribunales hacia las víctimas de violencia sexual a menudo revictimizaron a la persona.

La oferta de prostitución es generalmente ilegal pero ocurrió. Las ONG consideraron al turismo sexual un problema pero no tuvieron cifras sobre su extensión. La trata de mujeres hacia y dentro del país para prostitución fue un problema. (Ver sección 5, Trata.)

El acoso sexual en el sector público está prohibido por leyes que imponen medidas disciplinarias o correctivas. En algunas jurisdicciones (por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires) el acoso sexual puede derivar en el despido del acosador, mientras que en otras (tales como la provincia de Santa Fe), la pena máxima son 5 días de prisión. Ninguna ley federal prohíbe el acoso sexual en el sector privado. Hubo casos de acoso sexual, pero se hicieron muy pocas denuncias lo cual, según indican los especialistas, puede deberse a la falta de información sobre las protecciones legales existentes.

Aunque las mujeres gozaron de igualdad ante la ley, incluyendo los derechos de propiedad, se enfrentaron a discriminación económica y ocuparon un número desproporcionadamente más alto de empleos con baja remuneración. En promedio, los hombres ganaron un 38% más que las mujeres por igual tarea, un desequilibrio explícitamente prohibido por ley. Aproximadamente un 70% de las mujeres empleadas fuera de casa trabajaron en tareas no calificadas, aunque más mujeres que hombres eran graduadas universitarias. La ley dispone hasta tres años de prisión por discriminación basada en el género.

El Consejo Nacional de la Mujer llevó a cabo programas para promocionar la igualdad en las oportunidades sociales, políticas y económicas de las mujeres. El Consejo trabajó con el representante especial para asuntos internacionales de la mujer, el Ministerio de Trabajo, y organizaciones sindicales y empresarias para formar el Comité Tripartito sobre Igualdad de Oportunidades en el Trabajo para Hombres y Mujeres, el cual buscó promover un tratamiento equitativo y oportunidades para mujeres y hombres en el mercado laboral.

## Niños

Aunque el gobierno se declaró firmemente comprometido con los derechos y el bienestar de los niños, muchos programas no obtuvieron fondos suficientes.

La educación es libre y obligatoria durante 10 años, comenzando a la edad de 5 años. Aunque un informe del gobierno del año 2001 señaló que hubo la tasa de escolaridad se encontró entre el 92% (para la edad de 5 años) hasta un 97% (para edades entre 13 y 14), una evaluación del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento informó que de cada 100 estudiantes que ingresaron a la primaria, 84 llegarían al 7º grado, y 40 llegarían al último año de la secundaria. Los porcentajes de asistencia fueron más bajos entre niños de hogares de bajos ingresos. El acceso a la escolaridad fue limitado

en algunas áreas rurales del país. Las cifras de matriculación escolar de niñas fueron levemente superiores a las de los varones.

Hubo numerosos programas federales y provinciales de cuidado de la salud para niños y niñas sobre la base de un acceso equitativo. Mientras que dichos programas estuvieron disponibles en todas las provincias, los mismos tendieron a estar limitados a las áreas urbanas más grandes, lo que dificultó el acceso a niños en comunidades rurales aisladas.

Mientras que el abuso infantil continuó ocurriendo y no fue poco común, el gobierno tomó medidas para combatirlo. El Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia implementó una línea gratuita las 24 horas para ser utilizada por niños que soliciten consejo, presenten una queja, o informen sobre casos de abuso u otras violaciones de derechos. En el primer trimestre del año, el servicio de recepción de llamadas de la ciudad de Buenos Aires – línea 102 – recibió casi 1.900 llamadas, más de la mitad de las cuales fueron por ‘maltrato’, otro significativo grupo por ‘negligencia’ y un tercer gran grupo por violencia familiar. Junto con otras agencias y organizaciones, el Consejo asimismo llevó a cabo esfuerzos educativos y de concientización. Fiscales y policías investigaron casos de pornografía infantil a través de Internet. Asimismo, hubo niños involucrados en casos de explotación sexual, turismo sexual y tráfico de drogas.

El tráfico de niños fue un problema (ver sección 5, Tráfico.)

El trabajo infantil también fue un problema (ver sección 6.d.)

#### Trata de personas

La ley prohíbe la trata de personas para la prostitución mediante la utilización de engaños, intimidación, o coerción, o en el caso de menores; sin embargo, la trata ocurrió. La ley prohíbe, asimismo, el tráfico de extranjeros, la reducción a servidumbre y otros abusos de similar naturaleza. Asimismo pena los delitos a menudo asociados con la trata, tales como el secuestro, el trabajo forzado, el uso de documentación falsa, y la prostitución. Las penas por trata de personas van de 1 a 20 años de prisión, dependiendo de la naturaleza de la violación y la edad de la víctima.

La coordinación de la detección de la trata de personas y el desarrollo de causas penales contra la trata, mejoraron. La Oficina Federal de Asistencia a la Víctima (OFAVI), una unidad dependiente de la oficina del fiscal general, es la agencia que lidera la coordinación de los esfuerzos en la lucha contra la trata. La OFAVI coordina actividades con las fuerzas de seguridad, incluyendo a la Policía Federal y a la Gendarmería, con los Ministerios de Justicia, Interior, Relaciones Exteriores, la Dirección Nacional de Migraciones, y el Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Aunque los funcionarios encargados de la ejecución de la ley carecieron de un mandato preciso por parte de los líderes políticos ni suficientes recursos para perseguir con firmeza a los traficantes, tanto a nivel nacional como internacional, se incrementaron las investigaciones y los arrestos. El gobierno cooperó en investigaciones internacionales y trabajó junto con autoridades paraguayas y bolivianas en varios casos de trata de mujeres y menores. El gobierno cooperó en investigaciones internacionales.

La trata de personas involucró, principalmente, la trata de ciudadanos dentro del país, mayormente desde las provincias del norte a las provincias del centro y a Buenos Aires, y desde Buenos Aires a varias provincias del sur. En menor grado, el país fue de destino para las víctimas, mayormente, mujeres y menores provenientes de Paraguay y Brasil. La Organización Internacional para la Migración (OIM) estimó que el 52 por ciento de las víctimas paraguayas de las bandas de traficantes eran traficadas al país, y que el 34 por ciento de ellas eran mujeres menores de 18 años. Los grupos de mayor riesgo eran las mujeres y los niños de familias más pobres y de hogares destruidos, quienes estuvieron sometidos a maltrato físico y a abuso sexual en sus hogares y frecuentemente habían sido abandonados.

#### Casos de Trata con fines de trabajo forzado (Ver Sección 6. c.)

Aunque no se presentaron denuncias oficiales sobre las actividades de los traficantes, los medios de prensa informaron que frecuentemente los tratantes se presentaban a sí mismos como agencias de empleo o incluso como cuentapropistas. Los traficantes confiscaron documentos de viaje para evitar que las víctimas recurrieran a las autoridades en búsqueda de protección. Las víctimas, particularmente, mujeres y niñas involucradas en la prostitución, pueden ser privadas del contacto con el mundo exterior. Las víctimas fueron a menudo amenazadas o golpeadas.

No hubo denuncias de funcionarios del gobierno federal involucrados en la trata, y los funcionarios y agentes de policía locales sospechados de estar involucrados fueron investigados y procesados. En mayo, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de San Martín, Provincia de Buenos Aires, revocó el sobreseimiento del intendente de San Miguel, Oscar Zilocchi, dictado por un tribunal de primera instancia, quien había sido acusado de recibir coimas de varios dueños de prostíbulos. La Cámara de Apelaciones ordenó iniciar el juicio oral. Entre los otros procesados se encontraban un inspector de San Miguel, el hermano del Intendente de San Fernando, y 11 funcionarios policiales de la provincia.

Normalmente, las víctimas de la trata no fueron detenidas, encarceladas, o deportadas, aunque algunas que fueron arrestadas por delitos relacionados con la prostitución pueden ser encarceladas o deportadas.

Aunque el país careció de una política nacional y abarcativa de asistencia a la víctima, la ciudad de Buenos Aires, en particular, brindó asistencia a docenas de víctimas, y la mayoría de las provincias poseían oficinas de asistencia a las víctimas, incluyendo la asistencia de psicólogos a víctimas y testigos. Algunas víctimas reunían las condiciones para obtener ayuda del gobierno federal, pero la mayoría de los funcionarios provinciales no estuvo capacitado para identificar o asistir específicamente a las víctimas de la trata. La OIM brindó asistencia para la repatriación de víctimas extranjeras de la trata de personas. Las Hermanas Oblatas de la religión Católica también asistieron a las víctimas, proporcionándoles refugios de emergencia y asesoramiento.

El gobierno no tuvo una política comprensiva destinada a prevenir la trata de personas, pero se tomaron medidas preventivas aisladas. El gobierno hizo esfuerzos para mejorar su efectividad en la lucha contra la trata de personas, especialmente, en la ciudad de Buenos Aires, donde se estableció un red para llevar a cabo campañas de información pública, diseminación del tema, e identificación de la víctima infantil. Asimismo, el gobierno participó en un proyecto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

para prevenir y eliminar la explotación sexual comercial de menores en la región fronteriza de Brasil y Paraguay.

#### Personas con discapacidades

La ley prohíbe la discriminación contra personas con discapacidades físicas o mentales en el empleo, la educación, o el acceso a los servicios de salud o la provisión de otros servicios por parte del estado, y exige el acceso a los edificios para personas con discapacidades; sin embargo, el gobierno no hizo cumplir de manera efectiva estos derechos en la práctica.

Las leyes que establecen mejor acceso a los ómnibus y trenes para usuarios con discapacidades no fueron cumplidas por completo. El Comité Nacional Asesor para la Integración de Personas con Discapacidades, dependiente del Consejo Nacional para la Coordinación de Políticas Sociales, tiene responsabilidad formal sobre las acciones destinadas a integrar a las personas discapacitadas.

El gobierno implementó medidas destinadas a integrar personas con discapacidades en el mercado laboral. En agosto, la Marina inició un programa para contratar personas con discapacidades para determinadas tareas en algunas de sus instalaciones. En septiembre, la Guardia Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, que está encargada de prevenir y detectar situaciones de riesgo o delictivas en espacios públicos y convocar a las fuerzas de seguridad que correspondan para entrar en acción, publicó una búsqueda de personal a los fines de contratar personal con discapacidades.

#### Pueblos Indígenas

La Constitución reconoce las identidades étnicas y culturales de los pueblos indígenas y establece que el Congreso deberá proteger su derecho a una educación bilingüe, reconocer sus comunidades y la propiedad comunitaria de sus tierras ancestrales, y permitir su participación en la administración de sus recursos naturales. En la práctica, los pueblos indígenas no participaron, por completo, en la administración de sus tierras o recursos naturales, en parte, debido a que la ley no contempla de manera específica la propiedad comunitaria. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas es la entidad gubernamental responsable de implementar estas disposiciones.

Se estima que los principales grupos indígenas - los Kollas en Salta y Jujuy, los Mapuches en las provincias de la Patagonia, y los Wichis y Tobas en las provincias del norte - representan menos del 5 por ciento de la población nacional, con una cifra estimada que varía entre 1.75 y 5 millones de personas.

Los índices de pobreza son más altos que el promedio en áreas con una gran población indígena. Los pueblos indígenas presentaron mayores índices de analfabetismo, enfermedades crónicas, y desempleo. La falta de maestros capacitados dificultó los esfuerzos del gobierno tendientes a ofrecer oportunidades de educación bilingüe a los pueblos indígenas.

Los individuos descendientes de indígenas provenientes de la parte norte del país, así como de Bolivia, Perú, y otros países latinoamericanos, denunciaron que frecuentemente fueron insultados por su piel oscura.

Algunas comunidades se vieron involucradas en disputas territoriales con gobiernos provinciales y empresas privadas, particularmente sobre temas relacionados con la extracción de recursos naturales, la contaminación, y la construcción de carreteras. El 11 de agosto, en la provincia de Salta, la Asociación de Comunidades Indígenas Lhaka Honhat presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para oponerse a un decreto provincial que convocaba a un referéndum para decidir sobre el otorgamiento o denegación de ciertas tierras en disputa. La Corte Suprema rehusó entender en la causa; y, en octubre, tuvo lugar y se aprobó el referéndum. A mediados de octubre representantes de Lhaka Honhat y del gobierno federal y provincial asistieron a una reunión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las comunidades indígenas solicitaron la adopción de medidas cautelares para proteger las tierras ancestrales y pidieron que la CIDH considerara el caso, lo cual fue aceptado. El 1ro. de marzo, la comunidad toba Nam Qom de la provincia de Formosa presentó una denuncia ante la CIDH por múltiples violaciones a los derechos humanos por parte de la policía provincial y las autoridades nacionales y provinciales durante el año 2002. En el juicio se adujo que 80 miembros de la comunidad fueron torturados y detenidos arbitrariamente, algunos durante un lapso de hasta casi dos años.

## Sección 6 - Derechos de los Trabajadores

### a. Derecho de Asociación

La ley prevé el derecho de todos los trabajadores, con la excepción del personal militar, a formar y agruparse en "gremios libres y democráticos, reconocidos por simple inscripción en un registro especial", y los trabajadores ejercieron dicho derecho. Se estima que un 35% de la fuerza laboral estuvo organizada.

Los grupos de trabajo no afiliados a la Confederación General del Trabajo (CGT) afirmaron que la disposición de la Ley de Asociaciones Profesionales para el reconocimiento legal de sólo un sindicato por sector entra en conflicto con la Convención 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Uno de esos sindicatos, la Central de Trabajadores Argentinos, presentó un reclamo a la CIDH en marzo de 2004, y su petición aún seguía sin resolución a fin de año.

La ley prohíbe la discriminación contra los gremios e insta a los empleadores a reincorporar trabajadores despedidos ilegalmente por causa de actividades relacionadas con los gremios.

### b. El derecho a organizarse y discutir el convenio de trabajo en forma colectiva

La ley proporciona a los gremios el derecho de negociar colectivamente los convenios de trabajo y de poder recurrir a la conciliación y al arbitraje. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ratifica los convenios salariales, que cubren aproximadamente el 75 por ciento de la fuerza de trabajo con empleo formal. De acuerdo con la OIT, el proceso de ratificación impide los convenios colectivos de trabajo porque el ministerio considera no sólo si un convenio colectivo de trabajo contiene cláusulas en violación de los estándares de orden público sino también si el convenio cumple con los parámetros de capacitación vocacional, tecnología, inversión, y productividad. Sin embargo, no se conocieron casos durante el año en los que el gobierno haya rehusado la aprobación de algún convenio colectivo bajo los criterios anteriormente mencionados.

Los gremios tienen el derecho de huelga, aunque aquellos que representan a empleados públicos y a trabajadores que prestan servicios esenciales están sujetos a la condición de no interrumpir la prestación de "servicios mínimos" (no definidos).

Los trabajadores ejercieron este derecho efectuando huelgas legales.

No existe legislación especial o excepciones a las leyes regulares de trabajo en las tres zonas en las que se ejerce el procesamiento de exportaciones.

#### c. Prohibición de Trabajo Forzado u Obligatorio

Aunque la ley prohíbe el trabajo forzado u obligatorio, incluso, el de menores, hubo denuncias indicando dicha práctica (ver sección 5). A fines del año pasado, estaba en marcha una investigación en un supuesto caso de trabajo forzado que potencialmente involucraba a cientos de ciudadanos bolivianos que trabajaban en talleres textiles de Flores Sur, un barrio de la ciudad de Buenos Aires. Un juez federal rehusó entender en el caso, alegando incompetencia, y refirió el caso al Tribunal Nacional de Primera Instancia. Algunos de los trabajadores involucrados apelaron la sentencia del juez federal, y, a fin de año, el caso seguía pendiente de resolución.

#### d. Prohibición de Trabajo Infantil y Edad Mínima para el Empleo

La ley protege a los niños de la explotación en el lugar de trabajo y fija la edad mínima para empleo en 14 años. En casos excepcionales, el Ministerio de Educación puede autorizar a un niño menor a trabajar como parte de una unidad familiar. Los niños de entre 14 y 18 años pueden trabajar en un número limitado de categorías de trabajo, y durante una cantidad limitada de horas si han completado la educación obligatoria, la cual normalmente termina a los 15 años. Las sanciones por emplear a menores van de \$350 a \$1.750 dólares (de 1.000 a 5.000 pesos) por cada niño empleado. Los gobiernos provinciales y la ciudad de Buenos Aires son responsables del cumplimiento de la ley de trabajo.

En 2004, la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI) estimó que hasta 1,5 millón de niños, o 22% de los niños menores de 15 años, realizaba algún tipo de trabajo. La mayor parte del trabajo infantil ilegal se produjo en el sector informal, donde los inspectores tenían facultades limitadas para hacer cumplir la ley. El trabajo infantil en la zona urbana incluyó trabajos tales como la producción de ropa a pequeña escala, reciclado de basura, venta ambulante, servicio doméstico, y la preparación de alimentos. Los niños también fueron involucrados en la prostitución, el turismo sexual, y el narcotráfico (ver sección 5).

La CONAETI trabajó con gremios y otros grupos para capacitar a personas que monitorearon el trabajo infantil rural, y con autoridades provinciales en la zona de la triple frontera con Brasil y Paraguay para atacar el tema de la explotación sexual infantil. En el año 2004, el congreso reconoció que el país carecía de inspectores y programas suficientes para detectar el trabajo infantil o para rescatar a los niños explotados y que las sanciones contra los empleadores que explotaban niños eran inadecuadas. Las estadísticas del Ministro de Trabajo indicaron que los inspectores de trabajo provinciales y federales llevaron a cabo aproximadamente 64.000 inspecciones hasta fines de octubre. En el 44% de las inspecciones, los funcionarios detectaron alguna violación de cierto tipo, por lo general, relacionada con la contratación informal de trabajadores, por

los cuales los empleadores no pagaron los aportes correspondientes a seguridad social, obra social o seguros.

e. Condiciones de trabajo aceptables

El salario mínimo mensual fue de aproximadamente \$ 215 dólares estadounidenses (630 pesos), lo que no proporcionó un estándar de vida decente para un trabajador y su familia. La mayoría de los trabajadores del sector formal ganó un sueldo significativamente mayor que el salario mínimo. El Ministerio de Trabajo está a cargo de hacer cumplir la legislación relacionada con las condiciones laborales. Un informe del Ministerio de Trabajo basado en inspecciones realizadas durante el año indicó que el sector informal empleó al 46 por ciento de la fuerza laboral.

La ley de trabajo nacional establece parámetros en las áreas de salud, seguridad, y cantidad de horas. La jornada máxima de trabajo es de 8 horas, y la semana laboral más extensa es de 48 horas. Se requiere el pago de horas extras para las horas trabajadas en exceso de estos límites. La ley establece períodos mínimos de descanso, que fija en un mínimo de 12 horas entre un día de trabajo y otro. Los domingos son feriados, y aquellos que deban trabajar los domingos cobran doble. Sin embargo, las leyes que rigen las condiciones laborales aceptables no se respetaron de manera uniforme, especialmente, en el caso de trabajadores del sector informal.

La ley exige que los empleadores aseguren a sus empleados contra accidentes en el lugar de trabajo y cuando se desplacen desde y hacia el lugar de trabajo. Los trabajadores tienen el derecho a evitar aquellas situaciones en el trabajo que impliquen un peligro o sean insalubres sin que esto implique un riesgo para su continuidad laboral. Sin embargo, aquellos trabajadores que dejen sus lugares de trabajo antes de que se pruebe su inseguridad corren el riesgo de ser despedidos; en tales casos, el trabajador tiene el derecho de apelar a la justicia, pero el proceso legal puede ser muy largo.